



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ**

---

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019)

**RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-0044-00**

**ASUNTO: EJECUTIVO**

**DEMANDANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

**DEMANDADO: ISMAEL ARÉVALO BUITRAGO**

El abogado **HAIVER ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ**, quien actúa en nombre y representación de **LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, presenta demanda ejecutiva, con el objeto de que se libre mandamiento de pago a su favor, en razón a que mediante 1) Resolución FP-0093 de 24 de mayo de 2017, se ordenó al demandando a reintegrar la suma de veintiún millones novecientos diecinueve mil ochocientos dieciséis pesos m/cte (\$21.919.816), por concepto de los valores reconocidos y pagados anteriormente; 2) y que mediante Resolución FP 0276 del 15 de agosto de 2017, y Resolución 0436 del 31 de octubre de 2017, se declaró al señor **ISMAEL ARÉVALO BUITRAGO**, como deudor de la actora.

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no librar mandamiento de pago en el presente asunto. Para el efecto se analizará lo siguiente:

**A. PRETENSIONES**

La activa solicita se libre mandamiento ejecutivo de pago de la siguiente manera:

*“1. Sírvase señor juez librar mandamiento de pago a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL- FONDO PENSIONAL y en contra del señor ISMAEL ARÉVALO BUITRAGO identificado con C.C.19.195.476, por la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE( \$21.919.816,00), como capital principal contenido y representado en las resoluciones FP-0093 del 24 de mayo de 2017 en la que se le ordenó a la pensionada reintegrar a la Universidad la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M.L. (\$21.919.816,00), en la resolución 0276 del 15 de agosto de 2017 por medio de la cual se declara una deuda y se constituyó en deudor y la resolución 0436 del 31 de octubre de 2017 por la cual se resuelve el recurso de reposición y se confirma la resolución 0276 del 15 de agosto de 2017.*

2. Por el valor de los intereses comerciales oratorios sobre la obligación por capital del numeral anterior liquidado mes a mes a la tasa más alta vigente, es decir, incrementada en un 50%, a las tasas certificadas por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia para el interés bancario corriente mas un cincuenta por ciento, conforme a las fluctuaciones o variaciones que han tenido desde el día 10 de febrero de 2017, hasta la fecha en que el pago se verifique, al tenor de lo preceptuado en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999.

1.3. Que se paguen las anteriores sumas debidamente indexadas

1.4. En su debida oportunidad sírvase señor Juez condenar a los demandados en las costas del proceso.”

## **B. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.**

Destaca el abogado de la parte actora, que con base en las Resoluciones 0276 de 2017, proferida el 15 de agosto del mismo año, y Resolución 0436 de 2017, proferida el 31 de octubre del mismo año, por medio de las cuales se declaró al demandando como deudor de la Universidad Nacional, y declaró el monto de la deuda por un valor de \$21.919.816, con constancia de ejecutoria, se ha de librar mandamiento ejecutivo a favor de su representada, toda vez que no se ha dado cumplimiento a lo resuelto y ordenado en los predichos actos administrativos.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar que según lo establece el artículo 104 del C.P.A.C.A., en su numeral 6°, al definir los asuntos de que conoce esta jurisdicción, respecto de los procesos ejecutivos, estableció:

**“ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.  
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:(...)

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.”

Como se observa, se trata de una norma especial que atribuye la competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer únicamente de procesos de ejecución derivados **de contratos celebrados por entidades públicas, de las condenas impuestas y de las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción.**

Ahora bien, la precitada norma sobre jurisdicción que consagra el artículo 104 del C.P.A.C.A., taxativamente, no incluye dentro de su competencia, las

situaciones fácticas y jurídicas del presente asunto. No obstante, frente a este tipo de escenario, en el que se tengan como títulos ejecutivos **actos administrativos ejecutoriados que imponga a favor de las entidades públicas la obligación de pagar una suma líquida de dinero**, la misma norma de lo contencioso administrativo, preceptuó el procedimiento de cobro coactivo.

Frente a este, recuerda el Despacho, que el proceso administrativo de cobro coactivo, está definido como un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales.<sup>1</sup>

Ahora bien, el fundamento del cobro coactivo para las entidades públicas, como la Universidad Nacional de Colombia, son las preceptuadas en los artículo 98 y s.s., el cual estipula:

**“Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo.** Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.”

Frente a los documentos que prestan mérito ejecutivo, el artículo 99 de la Ley 1437 del 2011, preceptúa:

**“Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.** Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

**1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.”**

Negrilla fuera de texto

Luego es claro, que el procedimiento aplicable frente a la resolución FP-0093 de 2017, por la cual se ordena el reintegro de los valores cancelados a favor del demandante, y resolución FP-0276 del 2017, “por la cual se declara deuda y se constituye deudor”, y resolución FP-0436 del 2017, por la cual se resuelve un recurso de reposición, es el del **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO**.

Conforme a lo expuesto, es evidente que desde el momento mismo en que quedaron ejecutoriados los actos administrativos 0276 del 2017, y 0436 del 2017, los que determinaron deuda a favor a la entidad, la entidad quedó

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado. Consejero ponente: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO Bogotá D. C., nueve (9) de agosto de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-06-000-2007-00052-00(1835)

habilitada para hacer efectiva la decisión por ella adoptada, en los términos del artículo 98 y ss de la Ley 1437 del 2011, conforme a los cuales, los actos que queden en firme, serán suficientes por sí mismos, para que la administración pueda recaudar las obligaciones a su favor, toda vez que está **revestida de la prerrogativa de cobro coactivo**.

Lo anterior, en concordancia de lo Dispuesto por el máximo órgano de lo contencioso administrativo, en providencia del **veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014), con radicado No. 17001-23-31-000-2010-00247-01(C), en la** cual se expuso:

*“En la actualidad, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006<sup>2</sup>, el cobro de los créditos a favor de las entidades públicas se hace mediante el procedimiento de cobro coactivo que está regulado por el Estatuto Tributario. Los actos que se dictan en ese procedimiento son administrativos y, por ende, podrán impugnarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”<sup>3</sup>.*

Frente a este procedimiento de cobro coactivo, reglado por el Estatuto Tributario, tal como lo expuso el Consejo de Estado, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tienen conocimiento respecto de los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.

Al respecto, el artículo 101 de la Ley 1437 del 2011, señala:

**“ARTÍCULO 101. CONTROL JURISDICCIONAL. (...)**

*La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo:*

- 1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y*
- 2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares.”*

---

<sup>2</sup> “ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. (...)”

<sup>3</sup> El artículo 835 E.T. señala que son demandables los actos que deciden sobre las excepciones, los que ordenan seguir adelante con la ejecución. Por vía de interpretación, esta Sección ha entendido que también pueden demandarse, entre otros, el acto que decreta embargos, el que remate bienes del ejecutado, el que apruebe la liquidación del crédito, etcétera.

De lo anterior se colige, que solo una vez iniciado el trámite o procedimiento administrativo de cobro coactivo, propios de ciertas entidades, el Juez Administrativo examina la legalidad de los actos administrativos proferidos por las entidades públicas autorizadas para cobrar las obligaciones a su favor, que en términos del precitado artículo 101, son las que resuelvan excepciones a favor del deudor, los que ordenan seguir adelante la ejecución y los que liquidan el crédito, proferidos dentro del **Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo**.<sup>4</sup>; es decir, tal procedimiento, para el reconocimiento y pago de una obligación clara, expresa y exigible, no es iniciado por el Juez Administrativo, **sino por la misma entidad en uso de sus facultades extraordinarias.**

**No obstante lo anterior, recuerda el Despacho, que independientemente de que una entidad goce de la facultad de autotutela administrativa,** el juez administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 835 y 843 del Estatuto Tributario, así como en el 101 de la Ley 1437 del 2011, **“mantiene el control al ejercicio de la función administrativa, tanto en la etapa de determinación como en la de su recaudo forzoso”<sup>5</sup>,** puesto que la decisión que impone una acreencia y los actos que resuelven las excepciones y ordenan continuar con la ejecución son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho.

Ahora bien, frente a las facultades administrativas de cobro coactivo, recuerda el Despacho, que la entidad demandante, Universidad Nacional de Colombia, como *“ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, cuyo objeto es la educación superior y la investigación, a través del cual el Estado, conforme a la Constitución Política, promoverá el desarrollo de la Educación Superior hasta sus más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación, la ciencia y las artes para alcanzar la excelencia.”*, está totalmente facultada para activar y ejercer el procedimiento administrativo de cobro coactivo.

Lo anterior, en razón a que el artículo 5º de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, por la cual dictan normas para la normalización de cartera pública, con base en los principios que regulan la Administración Pública, establece que las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

---

4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014), Radicación número: 17001-23-31-000-2010-00247-01(C)

5 Corte Constitucional. Sentencia C – 649 de agosto 13 de 2002. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

Así las cosas, la entidad demandante, al revestirse de autonomía para usar, gozar y disponer de los bienes y rentas que conforman su patrimonio, teniendo en cuenta su naturaleza y régimen jurídico especiales, está facultada para adoptar el procedimiento de cobro coactivo, en aras de establecer criterios que faciliten el recaudo de cartera a su favor, generadas por obligaciones con otras entidades públicas y particulares; tal y como está preceptuado en la Resolución 141 de 2007, del 16 de febrero, por medio de la cual se *“reglamenta el procedimiento de jurisdicción coactiva en la Universidad Nacional”*.

Así las cosas, al no derivarse la acción ejecutiva que se invoca, este juzgado no puede dar trámite a la demanda ejecutiva presentada, toda vez que, las actuaciones a realizar frente a los títulos ejecutivos del presente asunto, deben surtirse por los procedimientos propios del proceso de cobro coactivo de la entidad, reglado por los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario, y 98 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Consecuencia de lo anterior, el Despacho **negará librar mandamiento de pago**, por las razones anteriormente expuestas.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

### RESUELVE

**PRIMERO. NEGAR EL MANDAMIENTO EJECUTIVO**, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

**SEGUNDO.-** Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**  
Juez

 <b>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD</b> <b>CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECCIÓN SEGUNDA</b>  Por anotación en <b>ESTADO ELECTRÓNICO</b> notifico a las partes la providencia anterior hoy <b>18 DE JUNIO DE 2019</b> , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)   <b>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA</b> <b>SECRETARIA</b>
--